

Durante la campaña electoral, Indira Gandhi adoptaba una hábil estrategia. De una parte presionaba al electorado declarando, en Ahmedabad, a mediados de enero de 1971 «que el Nuevo Congreso no participaría en un Gobierno de coalición si no obtenía la mayoría absoluta en los próximos comicios». Simultáneamente multiplicaba las declaraciones tendentes a atraer votos predicando un socialismo adaptado a la India para crear una «nueva sociedad». Así, por esas mismas fechas, afirmaba en Surate que estaba dispuesta a «combatir por el socialismo y la emancipación de los pobres hasta la última gota de su sangre». La primer ministro, con una asombrosa actividad, recorría todo el país y personalizaba desde el primer momento la campaña electoral. Los carteles de propaganda del Nuevo Congreso difundían por doquier su rostro sonriente en el que campeaba este eslogan: «Con Indira Gandhi el porvenir está asegurado».

No obstante, si sus consignas halagaban a las masas —su eslogan predilecto era: «Apuvrety hatao» («¡fuera la pobreza!»)— y engrosaban las filas de sus partidarios, también excitaba la cólera de sus adversarios, que no desperdiciaban ninguna ocasión para enfrentársele, incluso en el terreno de la violencia. Así Indira hubo de renunciar a pronunciar un discurso en Bombay a consecuencia de las violentas manifestaciones hostiles organizadas por el Jan Sangh. En Hyderabad, en Surate y en el Radjasthan ya había presenciado lluvias de piedras sobre la tribuna desde donde se dirigía a la multitud o al paso de su cortejo.

Indira Gandhi, a lo largo de la campaña, procuraba destacar su progresismo social. Prometía a las masas indias suprimir la pobreza y el desempleo, así como llevar a cabo una mayor socialización de la economía, impulsar la reforma agraria e implantar la justicia social. Nadie podía ignorar, sin embargo, los límites en que podía moverse su programa progresista, puesto que el Partido del Congreso no podía, en modo alguno, alarmar a los sectores de la peque-

ña y mediana industria, así como a los terratenientes modestos, que constituían una clientela fija y cuyo apoyo resultaba vital. Aunque necesitaba ganar, como mínimo, 40 ó 50 escaños sobre los 200 que poseía en la Asamblea anterior, si deseaba conseguir la mayoría absoluta en la nueva Cámara, Indira Gandhi supo mantener una actitud de prudencia extremada con la que pudiese atraer los votos de las clases populares más moderadas sin perder el de la burguesía media, que deseaba el triunfo del partido gubernamental para que sirviera de freno a los comunistas.

Debido a esta circunstancia, el programa electoral de la primer ministro se veía precisado a salir en defensa de la propiedad y las industrias privadas, al comprobar la alarma que habían demostrado muchos pequeños agricultores a consecuencia de los rumores, divulgados por la oposición, de que el Partido del Congreso, en el caso de un triunfo electoral, estaba dispuesto a suprimir la propiedad privada. El Nuevo Congreso cortaba la maniobra afirmando, de forma rotunda, que su objetivo consistía únicamente en impedir una excesiva concentración de la riqueza individual y fijar límites «razonables» a la propiedad. Simultáneamente apaciguaba a los hombres de negocios asegurando que, si bien se proseguiría la nacionalización de las compañías de seguros y de comercio exterior, no estaba previsto colocar nuevas actividades bajo el control del Estado y que la industria privada conservaría su «legítimo lugar» en la economía nacional. En definitiva, el programa electoral del Nuevo Congreso estaba lleno de esas paradojas que definen el espíritu del país y que tan acertadamente advertía la señora Robinson, prominente economista de Cambridge, al afirmar: «dígase lo que se diga sobre la India, lo contrario también es cierto».

Otro aspecto que no descuidaba Indira Gandhi era el de retener el voto de los millones de musulmanes que venían entregando los sufragios en favor del Congreso, con preferencia a la Liga Musulmana. Con tal fin, la primer ministro desplegaba una política laica y socializante. No obstante, frente a las elecciones de marzo, se alzaba la incógnita de si este apoyo musulmán hacia el Congreso no se habría perdido a consecuencia de la decisión del Gobierno de prohibir en Cachemira la presentación del Frente del Plebiscito, el movimiento del chej Abdullah, por temor a un triunfo de las tendencias secesionistas. La cuestión se complicaba cuando Nueva Delhi decidía expulsar, en febrero, al secretario del Alto Comisariado del Pakistán, acusado de haber organizado y dirigido las actividades de la organización terrorista separatista musulmana Al Fatah en la parte de Cachemira bajo control indio.

En el marco del más vasto escenario electoral del mundo—270 millones de electores— se asistía a las maniobras del partido gubernamental, que, para disponer de mayor libertad de acción, rechazaba la alianza a nivel nacional con las restantes formaciones políticas. El Partido Comunista prosoviético (PCI) se lamentaba de esta decisión recordando que el Congreso sólo buscaba su apoyo cuando se encontraba en dificultades en el Parlamento central o en ciertos Estados. A pesar de las muestras de amistad que daba el PCI, que sostenía a ultranza la formación gubernamental en el Parlamento y que se asociaba con el Nuevo Congreso en Kerala. Incluso algunos candidatos comunistas desistían de presentarse a las elecciones para conceder sus votos a los candidatos de Indira Gandhi. Por el contrario, el Congreso se aliaba con otros partidos a nivel local. Así colaboraba con el DMK en Tamil-Nadu, con el PCI en Kerala, con el Partido Bengalí en Bengala Occidental, con el Partido Sij Akali en Pundjab y con el Partido Socialista del Pueblo en varios lugares, aunque éste sólo tenía influencia en Bihar, Mysore y Orissa.

Frente al Partido del Congreso se alzaban diversas formaciones de oposición. Quizá la más importante la constituía la «gran alianza» entre el Viejo Congreso, el hinduista Jan Sangh, el Swatantra, partido de los príncipes y los industriales, y el grupo socialista Samyukta (SSP). Los tres partidos conservadores y el más izquierdista de los partidos socialistas indios componía así una masa poco coherente, pero que parecía singularmente peligrosa por sus heterogéneos arraigos. Así, el nacionalista Jan Sangh había recogido el 9,4 por 100 de los votos en 1967 y, cultivando los sentimientos religiosos de los hindús, estaba fuertemente implantado en el norte del país, donde poseía una sólida organización paramilitar. El Swatantra había alcanzado el 8,6 por 100 de los votos durante los pasados comicios y había conseguido configurar una organización derechista moderna y dinámica. Los cuatro partidos de la coalición actuaban durante la campaña electoral al grito común de: «Indira hatao» («¡fuera Indira!»).

A finales de enero, un mes antes de las elecciones generales, el Nuevo Congreso lograba un clamoroso éxito al batir, durante un escrutinio parcial, al primer ministro de Uttar-Pradesh. Por el contrario, en Mysore el candidato del Antiguo Congreso superaba al del partido gubernamental.

El 24 de enero de 1971 surgía el Estado número 18 de la Unión India: el de Himachal-Pradesh, situado en los contrafuertes del Himalaya y poblado por tres millones de habitantes. En este nuevo Estado la fuerza del partido

de Indira era muy considerable, como se había de demostrar en las futuras elecciones.

Como contrapunto de la campaña electoral se registraba un desolador horizonte de tumultos y desórdenes. El presidente de la República se veía precisado a disolver la Asamblea Legislativa de Orissa. Este Estado había sido gobernado por una coalición dirigida por el Swatantra. La coalición se rompió cuando dos de sus principales elementos se acusaban mutuamente de corrupción y el Gobierno central tenía que pasar a gobernar directamente el Estado. Finalmente, el Gabinete de Nueva Delhi recomendaba la disolución de la Asamblea ante la imposibilidad de formar un Gobierno que reemplazase a la dimisionaria coalición de derechas.

El panorama más inquietante se registraba en Bengala Occidental, cuna y reducto activo del comunismo indio, donde se producían los desórdenes más violentos que se hubieran conocido desde hacía mucho tiempo y eso que en 1970 la cifra de víctimas se había elevado a 1.300 muertos. Estos desórdenes consistían esencialmente en los combates entre dos grupos comunistas de diversa obediencia—comunistas-marxistas, el grupo más potente de Bengala, y naxalitas (o marxistas-leninistas)—, que se mataban mutuamente. El 17 de enero de 1971 un primer choque entre partidarios de ambas facciones causaba 16 muertos en Calcuta y, al proseguir los incidentes en los días sucesivos, el número de víctimas alcanzaba proporciones catastróficas. El 5 de febrero se descubrían los cadáveres de 11 naxalitas asesinados por sus rivales y en la semana siguiente resultaban muertas otras 16 personas. Se consideraba que en un Estado tan turbado no debían haberse convocado elecciones, pero resultaba imposible, por otra parte, no elegir una Asamblea local cuando debían designarse diputados para el Parlamento central.

Los desórdenes comenzaron cuando fue asesinado un militante marxista a manos de sus rivales. Poco después el jefe del Partido Comunista-Marxista (independiente de Moscú y de Pekín), Jyoti Basu, escapaba ileso, por tercera vez, a un atentado. Entonces sus seguidores decidieron «eliminar» a todos los naxalitas. «Si llegamos, de alguna forma, a tomar el poder—afirmaba Basu—no quedará ni un solo naxalita. Sólo existirá entonces el Partido Comunista-Marxista.» Los naxalitas, viéndose perseguidos a muerte por sus rivales, se defendían creando grupos terroristas que atacaban, a su vez, a los marxistas. El secretario del PCM, Gupta, declaraba que 180 militantes habían perecido a manos de los naxalitas en los últimos meses. Mientras tanto, el Gobierno central, que administraba directamente Bengala Occidental, se había visto preci-

sado a situar 70.000 policías y a proclamar el estado de excepción, apelando al ejército para mantener el orden durante la campaña electoral.

El PCM había obtenido el 4,1 por 100 de los votos emitidos en Bengala en 1967, disfruta de una sólida posición en Kerala y se hace notar en Andhra-Pradesh y Tamil-Nadu. Coincide con el PCI, ortodoxo y de obediencia moscovita —del que se desgajó en 1964—, en reclamar una reforma constitucional que restablezca los derechos soberanos del Parlamento, la concesión de mayor autonomía a los Estados, la nacionalización de todas las industrias básicas y la participación de los obreros en la gestión de las empresas nacionalizadas. Pero, a diferencia del PCI, no descarta el recurso a la lucha revolucionaria, ya que, según Basu, «no se pueden asestar golpes decisivos al régimen feudal que está en vigor en los campos indios sin una lucha revolucionaria»¹.

La referida efervescencia permitía escribir por esas fechas al director del *Indian Express*, el periódico más difundido en el país, que la Unión India no había conocido jamás violencias comparables a las que se estaban registrando en los últimos años.

Para culminar este ambiente de tumulto permanente, hacia finales de febrero, las violencias obligaban a decretar el toque de queda en Uttar-Pradesh. En Andhra-Pradesh la primer ministro era recibida con grandes manifestaciones que exigían la creación del Estado de Telengana. Y Calcuta estaba paralizada por una huelga general desencadenada por inspiración del Frente Democrático de la Izquierda Unida, tras el asesinato, por el PCM, de uno de los jefes del Bloque del Progreso.

A pesar de una situación tan poco tranquilizadora², el 1 de marzo de 1971 se iniciaban las elecciones legislativas. En la primera fase debían intervenir setenta millones de personas de nueve de los dieciocho Estados y dos de los nueve territorios de la Unión. De igual forma que durante la campaña electoral, la sangre corrió abundantemente durante las elecciones. En los cinco primeros días de votaciones se habían contabilizado más de cuarenta muertos y doscientos heridos. En Bengala Occidental eran asesinados un candidato y un dirigente del Congreso de la oposición que apoyaban a la primer ministro, eran incendiadas cinco escuelas y se lanzaba una bomba contra el domicilio de un magistrado. En Bihar debían anularse las elecciones en 25 centros

¹ GÉRARD VIRATTELLE, *Le Monde*, 16 de febrero de 1971.

² El día anterior parecía apuñalado, en Calcuta, el candidato comunista Mani Sanval y en un choque de estudiantes naxalitas con la policía, en la Universidad de Jadavpur, resultaban muertas siete personas.

a consecuencia de violentos incidentes. En Bengala, donde comenzaron las votaciones el 9 de marzo, resultaban muertas 21 personas en los dos días que precedieron a los comicios. Ese día en el total del país, y desde el 1 de marzo, el total de víctimas ascendía a 90 muertos.

Interesa destacar este aspecto tumultuoso de la campaña electoral y de las elecciones por cuanto tiene de significativo. La extraordinaria turbulencia que devastó la India durante aquellos comicios no puede considerarse, en modo alguno, como un hecho anecdótico, ya que resulta sobremanera significativa e induce a la reflexión.

Sorprende a primera vista que un horizonte tan generalizado de violencia hubiera podido instaurarse en la India, el país de la no violencia, pero ocurre que este concepto se interpreta con mucha frecuencia de un modo erróneo en Occidente: «Los estudiantes no vacilan en oponerse a la policía, incluso al rector, como ocurrió en la Universidad de Aligarh; los habitantes de Calcuta queman sus tranvías, las gentes del sur del país se queman en público para protestar contra el imperialismo lingüístico del Norte, etc. Esta violencia se ejercita por motivos justificados, que en raras ocasiones obedecen a consignas políticas estructurales»³. A su vez, Frank Fanon estima que «los condenados de la tierra sólo disponen de dos medios para afirmar su dignidad humana: la violencia revolucionaria o la fidelidad a la traición». Y el hecho preocupante que pretendemos destacar consiste en que en la violencia que asolaba la India durante esas elecciones podía verse ya una clara participación de las «consignas políticas estructurales», que tan poco impacto ejercían durante los años anteriores. Y, a su vez, esta violencia demostraba que la fidelidad a la tradición estaba siendo barrida por la violencia revolucionaria. Hasta entonces la tradición se había impuesto en gran número de conflictos: los levantamientos de campesinos, de habla telegu y de inspiración comunista, de 1951 no pudieron ser sofocados por las fuerzas armadas, pero bastó la intervención de una especie de santón, discípulo de Gandhi, llamado Vinoba Bhave, para que todo volviese a la normalidad. No obstante, en los últimos años, las masas indias se estaban politizando a ritmo acelerado y la tradición—que aún conserva un considerable peso específico—estaba siendo minada por la violencia revolucionaria, que dominaba reductos, como Bengala Occidental, cada vez más extensos. La violencia revolucionaria, en nuestro criterio, había alcanzado

³ *Notes et Etudes Documentaires*, núm. 3.370, marzo de 1967.

un nivel sumamente peligroso y todo permite asegurar que si, en algún momento, fallase el Nuevo Congreso o Indira Gandhi el subcontinente quedaría sumido en la anarquía y sería devastado por mil luchas intestinas.

La parte positiva de estas elecciones lo constituyó el triunfo extraordinario del Nuevo Congreso de Indira Gandhi, que lograba dominar los dos tercios de la Cámara del Pueblo. El éxito coronaba el programa anunciado por el primer ministro: moderadas medidas socializantes que atraían a las grandes masas y que no inquietaban a su clientela tradicional, reclutada entre la clase media. Sus adversarios, especialmente la «gran coalición» cuatripartita, sufrían una espectacular derrota. Otorgando sus votos al Nuevo Congreso, la mayoría de los indios demostraban su esperanza de que el Gobierno, disponiendo de la mayoría necesaria, pudiese reformar la Constitución proporcionando al país la estabilidad de que carecía en los últimos años.

Los resultados divulgados a mediados de marzo establecían el siguiente reparto de fuerzas:

PARTIDOS	(Cámara anterior) Diputados	(Nueva Cámara) Diputados
Nuevo Congreso	222	350
Antiguo Congreso	63	16
Jan Sangh	33	22
Swatantra	35	8
SSP (socialista)	17	3
PCM	19	25
PC (prosoviético)	23	23
Partido tamul DMK	25	23
PSP (socialista)	13	2
Varios	98	42

Quedaban nueve escaños por proveer: tres resultados no eran conocidos aún, otros tres diputados serían designados en elecciones parciales y otros tres diputados (dos representantes de la comunidad angloindia y uno de la región NEFA) son nombrados por el Ejecutivo.

En más de los dos tercios de las circunscripciones los electores indios habían votado a favor de Indira Gandhi y el Nuevo Congreso. El detalle de los escaños conseguidos por el Nuevo Congreso en los diversos Estados y territorios y su comparación con la Cámara anterior resulta sobremanera significativo:

ESTADOS	Núm. de escaños a elección	Cámara anterior	Nueva Cámara
Andhra-Pradesh	41	24	28
Assam	14	8	13
Bengala Occidental	40	13	14
Bihar	53	25	39
Cachemira y Jammu *	6	5	4
Gudjerat	24	3	10
Haryana	9	6	7
Himachal-Pradesh *	4	4	3
Kerala	19	1	6
Madhya-Pradesh	37	22	21
Maharashtra *	45	29	42
Mysore	27	10	27
Nagaland	1	1	—
Orissa	20	4	15
Pendjab	13	9	10
Radjasthan	23	12	14
Tamil-Nadu	39	—	9
Uttar-Pradesh	85	39	73
TERRITORIOS			
Andaman y Nicobar	1	1	1
Chandigarh	1	—	1
Dadra y Nagar-Haveli	1	1	1
Nueva Delhi	7	—	7
Goa, Damao y Diu	2	—	1
Laquedivas, Minicoy y Amindivi.	1	—	1
Manipur	2	—	2
Pondichery	1	1	1
Tripura	2	2	—
	518	220	350

* Falta por cubrirse un escaño en cada uno de estos tres Estados. Por otra parte, tres diputados son nombrados por el Ejecutivo. El total de la Cámara Baja, es por tanto, de 521 miembros.

El aplastante éxito de Indira Gandhi implicaba, al mismo tiempo, una grave responsabilidad: si las promesas de implantación de reformas sociales y económicas no se cumplían, la desconfianza erosionaría sus filas y haría surgir un magno interrogante sobre el futuro del país. Si Indira Gandhi no aplicaba totalmente su programa, las tendencias centrífugas y las tensiones regionales se acentuarían hasta un nivel alarmante.

A mediados de marzo la primer ministro reorganizaba su Gobierno. Ella misma acumulaba las funciones de primer ministro, Interior, Energía Ató-

mica, Plan e Información. El resto estaba compuesto por los siguientes ministros:

- Asuntos Exteriores: Sardar Swaran Singh.
- Defensa Nacional: Jagjivan Ram.
- Finanzas: Y. B. Chavan.
- Agricultura y Alimentación: Fakhruddin Ali Ahmed.
- Justicia: Gokhale.
- Asuntos Parlamentarios y Transportes: Raj Bahadur.
- Acero e Industria Pesada: Mohan Kumaramangalam.
- Desarrollo Industrial: Moinul Huq Chaudhuri.
- Educación y Seguridad Social: Siddhartha Shankar Ray.
- Ferrocarriles: Hau Hanumanthaïya.
- Turismo y Aviación Civil: Karan Singh.
- Sanidad y Planificación de Nacimientos: K. K. Shah.

Además de quince «ministros de Estado» y ocho secretarios de Estado.

Pronto se dejaban sentir las consecuencias del abrumador triunfo del Nuevo Congreso. El éxito en los comicios permitía a Indira Gandhi mantener a raya a los potentados locales en Radjasthan y Mysore y hacer entrar en la órbita del Nuevo Congreso a los autonomistas de Telengana, en Andhra-Pradesh. El 30 de marzo dimitía el Gobierno de coalición de derecha en Uttar-Pradesh y le sustituía otro del Nuevo Congreso. En dicha fecha, tres Estados se mantenían bajo el control del Gobierno central: Bengala Occidental, Orissa y Mysore. El 2 de abril, en Bengala Occidental se hacía cargo de la Administración un Gobierno de coalición—que apenas disponía de seis votos de mayoría sobre los comunistas marxistas—dominado por el Nuevo Congreso, pero el Gabinete fracasaba al no lograr restablecer la confianza de los medios económicos de la gran metrópoli industrial y comercial, Calcuta. Su labor resultaba constantemente entorpecida por la oposición del PCM que encontraba unas condiciones excepcionalmente favorables con la presencia de millones de refugiados del Pakistán oriental que favorecían el auge del terrorismo. En la semana del 17 al 24 de junio se habían cometido los siguientes vandalismos: seis autobuses incendiados, un dirigente del Nuevo Congreso muerto por una multitud armada de flechas y puñales; siete policías asesinados en plena ciudad; cinco terratenientes asesinados, etc. Al fracasar el Gobierno de coalición en su intento de restablecer el orden, el presidente de la República, Giri, se veía en la obligación de promulgar un

decreto, el 29 de junio, colocando nuevamente a Bengala Occidental bajo el control del Gobierno central. Al propio tiempo, Indira Gandhi nombraba un ministro de Estado sin cartera, Sidartha Shankar Ray, para ocuparse exclusivamente de los asuntos de Bengala Occidental, hecho sin precedentes que revela la importancia que Nueva Delhi atribuía a la alarmante situación bengalí. Especialmente en aquellos trágicos momentos de 1971 en que se asistía a las feroces luchas que, al otro lado de sus fronteras, tenían por escenario el futuro Bangla Desh ⁴.

La otra consecuencia del triunfo electoral y de su mayoría parlamentaria fue que la India se decidiese a lanzarse a la lucha contra el Pakistán. Sin el control absoluto del Parlamento —y sin el Tratado con la URSS, al que nos hemos referido en la parte I de este trabajo— la India no hubiese podido acometer la guerra indo-pakistaní con la resolución que demostró.

En octubre aparecía un nuevo motivo de preocupación para Indira Gandhi. Los elementos más jóvenes de su Partido atacaban la política económica y social del Gabinete durante la reunión del Comité Nacional del movimiento que se celebraba en Simla. Denunciaban el fracaso diciendo que los eslogans difundidos durante la campaña electoral —«eliminemos la pobreza», etc.— carecían de sentido, puesto que nada se hacía para transformarlos en realidades. Indira Gandhi, aunque reiteraba su voluntad de reducir las desigualdades sociales, se dirigía, con firmeza, a los Sindicatos llamando la atención acerca del «estado de anarquía que caracteriza las relaciones entre patronos y empleados» agregando que era intolerable que la minoría privilegiada de trabajadores sindicados —los que tenían una ocupación fija— comprometiesen el desarrollo de la economía.

No obstante, resultaba prematuro juzgar sobre la capacidad o decisión del nuevo Gobierno para aplicar reformas económicas, ya que todos los esfuerzos del Gabinete se concentraban en el asunto decisivo de la próxima guerra con el Pakistán, al que se subordinaban las restantes cuestiones. En tales condiciones no se podía juzgar acerca de la bondad del V Plan quinquenal que Giri había presentado ante el Parlamento a finales de marzo. El nombramiento de Subramaniam como ministro del Plan parecía acertado, dada su probada competencia y su moderación. El nuevo ministro había declarado que el Gobierno debía resistir la tentación de buscar continuamente, con el fin de parecer progresista, rebajar los límites de las propiedades agrarias, puesto que, en su opinión, el objetivo debe ser garantizar, durante

⁴ Cfr. la primera parte de este trabajo en el número 138 de esta REVISTA.

numerosos años, un «óptimum económico» a las explotaciones agrícolas. Este enfoque de la cuestión defraudaría a muchos, pero resultaba eminentemente realista. Y suponía la mayor trascendencia, ya que la India es un país eminentemente agrícola en el que no menos del 70 por 100 de su población trabaja la tierra y produce el 46 por 100 de la renta nacional. Entre 1951 y 1965, el índice de crecimiento de la agricultura había sido del 3 por 100 anual, y en el IV Plan (1965-71) se había conseguido el 5,3 por 100, es decir, casi el doble. Este índice sólo se podía obtener mejorando la productividad, ya que no resultaba posible conseguir un aumento sensible de las superficies cultivadas. Durante los planes anteriores se había comprobado que la agricultura no había sabido utilizar debidamente las considerables inversiones públicas puestas a su disposición durante los últimos años, especialmente en materias de regadío, cuyo potencial sólo se aprovechaba de forma imperfecta, puesto que la escasa capacidad de la inversión privada no le permitía beneficiarse, eficazmente, de la inversión pública. Esto se debe, fundamentalmente, a la débil superficie de esas explotaciones, que sólo cubren la subsistencia, ya que el 50 por 100 de las familias rurales trabajan parcelas de superficie inferior a las 1,2 hectáreas, cuando el umbral de la rentabilidad se estima en cinco. Estas consideraciones demuestran lo acertado de la postura manifestada por Subramaniam, opuesto a la excesiva parcelación, que resulta antieconómica. En los últimos planes, el Gobierno trata de generalizar la adopción de nuevas técnicas de producción, pero los gastos necesarios para ello sólo se hallan al alcance de los campesinos más acomodados que poseen medios para invertir. Todo hace suponer que la mitad, por lo menos, de las explotaciones no podrían participar en el progreso y pronto serían absorbidas por otras de mayor dimensión, de explotación económica viable, pero este proceso implica, simultáneamente, una agudización de las tensiones políticas que se registran en el campo y podían generalizar las acciones revolucionarias que predominaban en los medios rurales de ciertos Estados, principalmente Bengala Occidental.

De todas formas, aplicando el programa del Nuevo Congreso, el 13 de mayo habían sido nacionalizadas las compañías de seguros—64 indias y 42 extranjeras— que empleaban 25.000 personas.

En una visión general se descubría que ni el año 1971 ni los siguientes constituían el momento más apropiado para introducir las reformas económicas y sociales que había venido predicando Indira Gandhi, porque la economía india había de resentirse, durante largo tiempo, de los gastos

inmensos que había ocasionado la ayuda a los refugiados del Bangla Desh y la preparación y desarrollo de la guerra con el Pakistán. Este acontecimiento capital en la historia de la Unión India debía gravitar pesadamente sobre la economía y echaba por tierra todos los planes anunciados por el primer ministro. El presupuesto de 1972-1973, presentado el 16 de marzo de 1972 al Parlamento por el ministro de Finanzas, era completamente ortodoxo, sin ninguna relación con las medidas prometidas por el Nuevo Congreso durante la campaña electoral. Los gastos suponían 68.000 millones de rupias, el presupuesto militar se llevaba la parte del león y el déficit total se estimaba en 3.750 millones de rupias. Para hacer frente a los gastos derivados del conflicto bélico había sido necesario elevar los impuestos en tres ocasiones. El coste de la guerra se calculaba en 1.350 millones de rupias tan sólo para el material militar destruido (45 aviones, 73 tanques, una fragata)⁵. La necesidad de reponer ese armamento y adquirir nuevos equipos, así como socorrer a las víctimas de la guerra y a sus familias—según el ministro de Defensa se registraron 3.471 muertos y 8.648 heridos—suponía unos desembolsos enormes que comprometían la puesta en marcha del programa económico-social prometido por el primer ministro durante la preparación de los comicios. La «lucha contra la pobreza» resultaba seriamente comprometida por la emergencia bélica, y el desarrollo industrial se había atenuado. Podía afirmarse que, un año después de las elecciones, el panorama económico presentaba peor aspecto que antes de dicha fecha. En un esfuerzo por no defraudar totalmente a sus electores, Indira Gandhi ampliaba el presupuesto destinado a obras de carácter predominantemente social: hábitat rural, alimentación, agua potable, educación primaria, etc., pero el conjunto de las cantidades consignadas para estos gastos apenas sobrepasaba el presupuesto militar. En estas condiciones todo hacía temer que la desilusión se apoderase de las masas que habían votado a Indira Gandhi con la esperanza de ver implantadas medidas efectivas para mejorar su precario nivel de vida. Pero la dura realidad demostraba que durante largo tiempo el país no contaría, por ejemplo, con una red sanitaria lo suficientemente efectiva para borrar el lamentable estado que implicaba la circunstancia de que de 560.000 núcleos de población, 130.000 de ellos continuasen afectados por el cólera y las enfermedades intestinales endémicas. Estas y otras irritantes realidades

⁵ GÉRARD VIRATILLE: «Débat budgétaire a New-Delhi», *Le Monde*, 19-20 de marzo de 1972.

contribuían a fomentar el permanente estado de agitación que se había implantado en el país.

No obstante, si el Gobierno manifestaba tales limitaciones en el terreno económico-social, por el contrario adoptaba una actitud resuelta para contener la agitación subversiva. El 6 de mayo, el presidente de la República firmaba un decreto instituyendo la detención preventiva en todo el territorio nacional. Esta disposición permitía a la policía detener, sin juicio, durante un largo período a los sospechosos indios o extranjeros. La decisión coincidía con el anuncio de la reunión efectuada, en el sur del Nepal, de 1.500 comunistas prochinos indios y nepalíes que habían decidido intensificar la lucha armada. La nueva legislación permitía detener durante un año por lo menos a todo agitador al que le fueran encontradas armas, municiones o explosivos.

Otro motivo de especial preocupación consistía en la persistencia de la actitud de rebeldía de ciertas tribus residentes en los territorios nororientales de la Unión.

A pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo por los sucesivos Gobiernos que se han alternado en Nueva Delhi desde la proclamación de la independencia del país, no se ha conseguido acabar con la revuelta armada de los nacionalistas naga y mizo. El medio millón de habitantes del Nagaland, a pesar de ser una gota de agua en el inmenso océano demográfico de la Unión India, lleva soportando una cruel guerra clandestina contra las autoridades centrales que dura ya un cuarto de siglo. En tan dilatado período de tiempo, el enfrentamiento ha pasado por fases de aparente decaimiento, que han sido seguidas de súbitos recrudecimientos de la acción militar.

Antes de diciembre de 1971, fecha de la guerra indo-pakistaní, los rebeldes nagas encontraban en el Pakistán oriental un excelente refugio para escapar a la persecución de las fuerzas armadas de Nueva Delhi. El desencadenamiento de las hostilidades en el Pakistán oriental—que había de concluir con la proclamación de la independencia de Bangla Desh—incidía, respecto a la rebelión naga, de dos formas opuestas. De una parte, la marcha de las tropas indias concentradas en Nagaland hacia el Pakistán oriental, una vez iniciada la ofensiva, promovía el incremento de la actividad naga. Al mismo tiempo, la penetración de los soldados indios en Bangla Desh determinaba que varios dirigentes nagas que se encontraban refugiados en Dacca tuviesen que rendirse a las tropas de Nueva Delhi. No obstante, ambos acontecimientos no alteraban la tregua que se mantenía,

oficialmente, desde 1964, y que sólo había sido quebrantada por acciones episódicas de escasa envergadura. En consecuencia, a principio de 1972, el Nagaland era promovido al rango de Estado de la Unión India, y esta decisión gubernamental favorecía la adhesión de algunos rebeldes a las autoridades nagas fieles a Nueva Delhi. El Gobierno central se mostraba dispuesto a respetar todos los particularismos nagas, pero no aceptaba, en modo alguno, su separación de la Unión India, porque sería un peligroso precedente que podría provocar la desmembración total.

A pesar de todo ello, la creación del Estado de Nagaland no bastaba para colmar las aspiraciones de un sector de la población naga, que aspira a lograr la total independencia. Los partidarios ~~de la~~ secesión permanecían refugiados en la selva, dispuestos a seguir combatiendo. Con ello se ponían de manifiesto las profundas diferencias, políticas y tribales, que escinden a una población tan heterogénea como la que habita en aquella región, donde conviven tribus muy diversas que hablan 15 dialectos distintos. Todos estos antecedentes permiten poner en duda la viabilidad del Estado naga. En tales condiciones se registraba el triunfo electoral del Partido Nacionalista Naga de Hokishe Sema, que pasaba a ocupar el puesto de primer ministro. Poco después reaparecía la revuelta armada tras de la tentativa de asesinato de Sema y de un atentado cometido contra la estación de radio de la capital del Estado, Kohima. El ejército indio recibía órdenes severas para reducir a los insurgentes, que se encontraban debilitados desde que Pekín redujera la ayuda que les venía concediendo. El 31 de agosto de 1972, el Gobierno central declaraba fuera de la ley a las organizaciones políticas, administrativas y militares que mantienen los nagas en la clandestinidad. Esto no ha significado el aplastamiento de la rebelión, ya que, de forma episódica, los insurgentes llevan a cabo espectaculares golpes de mano en su actividad guerrillera. En febrero de 1974, Nueva Delhi comunicaba que, durante las últimas semanas, 15 soldados habían sido muertos, y el 27 de julio otros 11 policías corrían igual suerte durante un ataque por sorpresa efectuado por un comando naga, que se apoderó de gran cantidad de armas y municiones.

Tampoco ha sido totalmente resuelto el problema planteado por los mizos. Son éstos poblaciones tribales de tipo mongoloide-tibetano totalmente distintas a los demás grupos étnicos indios. Como los nagas, una fracción importante de estas poblaciones reclamaron la secesión de la Unión India desde que ésta proclamase su independencia, y al no ver satisfechas sus

reivindicaciones nacionalistas, crearon una organización clandestina que organizó la lucha guerrillera.

Tratando de respetar las particularidades mizo y de contentar, al máximo posible, sus aspiraciones, el Gobierno central creaba, en febrero de 1972, entre otros, el territorio de Mizoram, separándolo del Estado de Assam, donde convivían, en creciente dificultad, etnias diferentes. Nueva Delhi creía haber satisfecho, de tal manera, las aspiraciones de las poblaciones mizo, pero la derrota del Partido del Congreso en Mizoram durante las elecciones de mayo de 1972 demostraba que no se había conseguido el esperado impacto favorable.

Todo inducía a pensar que una fracción apreciable de la población mizo aspira a la total independencia y que no se conforma con la autonomía administrativa. La acción clandestina del Frente Nacional Mizo se había mantenido activa durante muchos años, haciendo conocer su presencia armada mediante sabotajes y emboscadas. Estas acciones guerrilleras culminaron en febrero de 1966, alcanzando tal envergadura, que el Gobierno central montó una acción represiva de vasto alcance para erradicar el movimiento rebelde. Entre otras medidas, procedió a reagrupar la mitad de las tribus en distintos centros directamente controlados por las fuerzas armadas, lo que sólo contribuyó a excitar los ánimos de quienes se veían desplazados de sus habituales lugares de residencia. El territorio mizo linda con las fronteras del actual Bangla Desh, y entonces, antes de la secesión bengalí, el Gobierno pakistaní decidió aprovechar en su beneficio el descontento mizo, para lo cual procedió a albergar en su territorio oriental a 2.000 guerrilleros mizos que habían franqueado la frontera al ser perseguidos por las tropas de Nueva Delhi. Esos 2.000 hombres fueron armados y entrenados en las *Hill Tracts*, al noroeste de Chittagong, y prestaron ayuda considerable al ejército del Pakistán durante la sublevación bengalí. Cuando el ejército indio se preparaba para invadir el Pakistán oriental, en agosto de 1971, el Gobierno de Indira Gandhi anunció una amplia amnistía para los mizos que regresaran, pero obtuvo un éxito muy reducido, ya que sólo algunos centenares se acogieron a las medidas de indulgencia. No obstante, los que se negaron a aceptar el regreso se vieron gravemente comprometidos cuando las tropas indias invadieron y ocuparon totalmente el Pakistán oriental y fue proclamada la independencia de Bangla Desh. En marzo de 1972, las nuevas autoridades de Dacca se enfrentaron a una resistencia de los rebeldes mizos que permanecían en territorio de Bangla Desh,

ayudados por elementos del antiguo ejército pakistaní, por lo que iniciaron una ofensiva, apoyados por una división india de montaña. Los mizos supervivientes tuvieron entonces que refugiarse en Birmania.

Las elecciones de mayo de 1972, aun siendo un revés para el Nuevo Congreso, revelaban que el problema no es, tal vez, tan agudo como en el caso del Nagaland. El triunfo electoral fue conseguido por un partido mizo moderado, la Unión Mizo, cuyas aspiraciones, momentáneamente, se concretan en la transformación del actual territorio de Mizoran en un Estado de igual nombre, es decir, su elevación al rango de Estado de la Unión India.

* * *

A pesar del incumplimiento de las promesas formuladas por el Nuevo Congreso en la campaña de las elecciones generales de marzo de 1971—puesto que, en realidad, sólo se habían llevado a cabo tímidas tentativas de corregir una angustiosa situación socioeconómica—, el partido de Indira Gandhi obtenía un nuevo triunfo, en marzo de 1972, en las elecciones locales. Doscientos millones de personas—de 16 Estados y dos territorios—acudían a las urnas para elegir 2.700 representantes parlamentarios. La participación osciló, según los lugares, entre el 30 y el 50 por 100, y se desarrollaron de forma más tranquila que en los anteriores comicios, ya que sólo se registraron, según las cifras oficiales, 12 muertos y 150 heridos.

La explicación del éxito electoral del Nuevo Congreso, tras de haber incumplido la mayoría de las promesas formuladas en 1971, sólo puede atribuirse al impacto popular logrado por el triunfo militar sobre el Pakistán. El orgullo patriótico, satisfecho por la victoria sobre el enemigo permanente, hacía olvidar a las masas populares la lamentable condición de su existencia, y daba sus votos al Gobierno que había hecho posible el éxito de las armas indias. Indira Gandhi había explotado a fondo el sentimiento nacionalista de su pueblo, recorriendo el país durante todo un mes, y en cada etapa concedía más atención a la evocación del triunfo militar que a los problemas regionales.

El resultado de estas elecciones permitía asegurar la estabilidad política durante los próximos cinco años, plazo que dura la legislatura. El Nuevo Congreso, que ya se llamaba solamente Congreso, en virtud de una decisión de la alta jurisdicción india, confirmaba su supremacía en las asambleas de los Estados, que de tal modo podrían trabajar en perfecta armonía con

el Gobierno central. El Congreso ya no encontraba ningún adversario de envergadura en el plano nacional. La victoria sobre el Pakistán le había fortalecido y había privado al Jan Sangh, el más peligroso rival en el norte de la India, de sus principales argumentos. Sólo en Bengala Occidental, el Partido Comunista-Marxista parecía, antes de las elecciones, representar una seria amenaza para el Congreso, pero los comicios revelaban una severa derrota de los marxistas, que se habían aliado a otros pequeños grupos de extrema izquierda. El PCM impugnaba los resultados, afirmando que éstos se debían a la coacción impuesta por bandas de «voluntarios» del partido gubernamental, reclutados en los bajos fondos de Calcuta, que habían impuesto el terror «en unas 50 plazas fuertes marxistas cuidadosamente seleccionadas». «Algunos individuos—proseguía el informe—que se auto-proclaman naxalitas se han unido a los equipos de matones del Congreso, y los recalcitrantes han sido asesinados.» Basándose en esta presunta intimidación del electorado, el PCM solicitaba una «encuesta imparcial» que anulase el resultado electoral. De todas formas, tampoco la coacción bastaba para explicar cómo el PCM había descendido del 32 por 100 de los sufragios en 1971 al 27,5 por 100 en estas elecciones locales. Tanto más por cuanto que el PCI, aliado con el Congreso, había conseguido compartir el éxito de éste.

El otro aspecto capital registrado en 1972 consistía en las hábiles maniobras verificadas por Nueva Delhi para imponer una «paz india» al Pakistán. Las peticiones de Islamabad de que fueran liberados, inmediatamente, los prisioneros de guerra habían tropezado con los alegatos de Nueva Delhi de que ese aspecto parcial de la cuestión debía inscribirse en el marco de un acuerdo general que garantizase una paz duradera en la frontera occidental. La India se mostraba dispuesta a efectuar concesiones, abandonando sus reivindicaciones sobre la Cachemira libre, siempre y cuando el Pakistán aceptase que la actual línea de alto el fuego fuese la frontera definitiva, es decir, que fuese reconocida la soberanía india sobre el sur de la provincia disputada. Los acuerdos alcanzados en Simla, que examinaremos más adelante, parecían confirmar la posición de fuerza conseguida por la India en los campos de batalla.

JULIO COLA ALBERICH



NOTAS

